

La paz y su clima de opinión?

Por Eduardo Posada Carbó**

El vocabulario político es siempre ambiguo, advirtió el filósofo inglés Michael Oakshott. Y nada más equívoco hoy en Colombia que la expresión “paz”. Mientras que algunos la interpretan en su sentido más limitado - el fin del conflicto armado -, otros la identifican con una aspiración social plena - la erradicación de toda forma de violencia y de las mismas causas que supuestamente le dieron origen al problema. Oakshott también observó que la ambigüedad del vocabulario político tiene méritos y defectos. El mérito de referirnos en forma ambigua a la paz sería el de permitir el diálogo sobre una ambición común, a pesar de sus diferentes formas de ser concebida. Creo que el defecto en este caso, sin embargo, podría negarle su valor meritorio, en la medida en que la ambigüedad de propósitos haría imposible conquistar la paz, comoquiera se le defina, en un futuro cercano. Más aún, lejos de la ambigüedad, se ha impuesto entre nosotros un concepto maximalista de la paz, en medio de un clima de opinión que es preciso desentrañar.

La paz se nos propone como una gran utopía. Una utopía que se construye en oposición, ante todo, a la imagen contraria de una nación históricamente bárbara. El pasado colombiano se nos describe apenas como una sucesión ininterrumpida de conflictos civiles. Así, desde la independencia, solo parecería identificarnos la guerra. La personalidad colombiana que se habría forjado en este pasado guerrero se caracteriza, de manera exclusiva, por su intolerancia y sus actitudes extremas. Myriam Jimeno ha mostrado los diversos mensajes reiterados a la opinión pública en forma cotidiana: ‘somos “insensibles”, nos “acostumbramos” a la violencia; es “nuestra forma natural de convivencia”; tenemos “una cultura de la violencia”; no “hacemos nada” para enfrentar la violencia”; “la muerte se rutiniza”; “la violencia es una forma de vivir”; “somos un pueblo naturalmente condenado a la violencia”...; “el peor enemigo de un colombiano es otro colombiano”. En conclusión, “somos el pueblo más violento del mundo”’. (En

Museo Nacional, ed., *Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX*, Bogotá, 1998, p. 252). Sobre este lenguaje, como bien lo describe Jimeno, surge “un ser monstruoso, encarnado, personificado, agente activo de la vida social, sello distintivo de la colombianidad” (idem., p.253). La utopía de la paz se nos presenta entonces como un camino para superar, de una vez por todas, esa “identidad nacional perversa”.

Alternativamente, la utopía de la paz también se construye en contraposición a una clase dirigente malévola e incapaz. La responsabilidad de la violencia no recae aquí sobre toda la nación, sino sobre un grupo que se denomina indistintamente como “elite”, “oligarquía”, “establecimiento”, o “clase política tradicional” – los artífices históricos de un sistema injusto y sin oportunidades. En el vocabulario común, la tal “clase dirigente” aparece como un conjunto inamovible y continuo que, desde la independencia, habría manejado a su acomodo los resortes del poder. Otras expresiones de uso corriente describen ese dominio de “los mismos con las mismas” en una “sociedad cerrada”, a través, en su versión extrema, de una “dictadura bipartidista y excluyente desde los tiempos de Bolívar”. Este lenguaje proyecta la falsa imagen de un país social y políticamente estático, durante dos siglos de eternas frustraciones. En este lenguaje, la historia de la democracia colombiana no tiene valor alguno, excepto en sus aspectos formales que de todas maneras se consideran corruptos. Aquí, se nos se repite con frecuencia, no hay ni ha habido nunca oposición democrática.

Bajo este clima de opinión, no se le reconoce mayor legitimidad al Estado colombiano, mucho menos a su sistema político. Las expresiones “crisis de legitimidad” e “ilegitimidad” se han convertido en lugares comunes para explicar el origen último de los problemas. Se trata de un discurso francamente deslegitimador que, como lo ha admitido Hernando Gómez Buendía, contribuye a agravar “el déficit de legitimidad”. Los procesos electorales, que se suceden regularmente, no parecen entenderse como fuente de poder legítimo. Existe un preocupante desprecio por la práctica del sufragio, a la que sólo se identifica con el clientelismo, excepto en las votaciones por candidatos

llamados “independientes”. El mismo ejercicio de ingeniería constitucional que se llevó a cabo en 1991 - en buena parte para facilitar la incorporación política de los grupos guerrilleros que se acogieron entonces a las negociaciones de paz con el Estado -, ha perdido cualquier efecto relegitimador de las instituciones. No hay casi referencias a los éxitos del anterior proceso de paz, del que sólo se destacan sus supuestos fracasos.

Importa señalar que este clima de opinión es el resultado de un lenguaje absolutista, lleno de juicios de valor, donde sobresale la retórica por encima del argumento razonado. Y un lenguaje además confuso, en su forma de expresarse y en los valores que defiende. ¿Qué impacto tiene este clima de opinión sobre el proceso de paz y sobre el propio problema de la violencia? Al identificar la violencia como una característica más de la personalidad colombiana, se desestimulan políticas estatales para atacar con eficacia a los responsables de actos violentos. Como lo ha expresado Myriam Jimeno, en esos juicios generalizados contra la nacionalidad se diluye “la especificidad de las formas de acción violenta, que se pierde en aras de la violencia global, indiferenciada, difícil, si no imposible, de combatir”. Similarmente, al enjuiciarse no ya a la nación sino al sistema, se termina por “defender más abiertamente a los violentos como grandes víctimas de una sociedad injusta”. Bajo estas condiciones, no es difícil apreciar la débil posición del Estado en la mesa de negociaciones, a pesar de llevar allí la representación legítima de la sociedad. Y en cualquier caso, implícita o explícitamente, el diagnóstico de los males nacionales que surge de este clima de opinión favorece la búsqueda de una paz maximalista. El cese al fuego, la desmovilización, el desarme - el fin del conflicto armado -, se vuelven entonces objetivos secundarios frente a la utopía de transformarlo todo. Así, acorralados ante la presión de las armas y sin defensas intelectuales, se aleja la paz posible y se impone la barbarie, mientras siguen creciendo las amenazas contra el porvenir democrático.

? Este es el cuarto de una serie de artículos en los que se examina el lenguaje que domina hoy el análisis político en Colombia y sus efectos en el proceso de paz.

****Eduardo Posada Carbó es asesor permanente de la Fundación Ideas para la Paz. Sus artículos quincenales son elaborados especialmente para nuestras redes de información. Posada Carbó es abogado con especialización en ciencias socio-económicas de la Universidad Javeriana, master en estudios latinoamericanos y doctor en historia moderna de la Universidad de Oxford. Es autor y editor de varios libros y ensayos. En la actualidad es Senior Lecturer del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres y columnista de El Tiempo.**